



Javier Pradera

Solos ante el peligro

EL ENCUENTRO DEL PRESIDENTE del Gobierno con el líder de la oposición acordó la reconversión forzosa de las cajas de ahorro, depositarias de la mitad de los recursos de todo el sistema financiero. La modificación de la Ley de Cajas anunciada para antes de tres meses y el listado de candidaturas a los procesos de fusión o absorción no serán tareas pacíficas; su papel en el funcionamiento de los Gobiernos de las comunidades autónomas y de los grandes partidos de cada región cargará las negociaciones de tensión política.

Aunque la cortedad de su agenda haya decepcionado, la reunión abre un resquicio a la esperanza de que Zapatero y Rajoy comiencen a recapacitar sobre sus deberes *históricos* como máximos líderes de los únicos partidos —PSOE y PP— con posibilidades de ejercer el gobierno de España a corto y medio plazo. Hasta ahora el presidente del Gobierno y el líder de la oposición habían afrontado la crisis económica de manera ambivalente, a la vez como un empobrecimiento temporal (aunque de segura recuperación) de la sociedad española respecto a los tres lustros anteriores y como una oportunidad para conservar (los socialistas) o reconquistar (los populares) el poder en las elecciones de 2012. El resultado de esa doble estrategia ha sido la resistencia del PSOE —como Gobier-

El presidente del Gobierno y el líder del PP acuerdan la reconversión forzosa de las Cajas de Ahorro

no— y del PP —como alternativa de poder— a proponer duras medidas de ajuste (régimen de pensiones, mercado laboral, retribución de funcionarios, gastos sociales) de eficacia quizá incierta, pero claramente perjudiciales para ganar votos. Como en el chiste, Zapatero y Rajoy parecen decirse antes de cruzar la puerta de esas grandes decisiones “pase usted primero que yo voy antes a por tabaco”.

El presidente del Gobierno apostó a favor de un ciclo corto que limitaría la sangría del paro a términos razonables, no afectaría al sistema financiero y permitiría recuperar la actividad productiva y crear empleo antes de llegar con las velas desplegadas al puerto de las elecciones generales. El beneficio simbólico de Zapatero habría sido ganar el prestigio de ser un piloto capaz de guiar en solitario la nave del Estado a través de las aguas turbulentas. Aun sin compartir del todo ese diagnóstico optimista, Rajoy circunscribía los males de la crisis a la actual legislatura; de aquí a 2012, sería conducido a hombros de la recesión y del creciente desempleo a la victoria electoral para gobernar luego en un clima de prosperidad.

Pero los movimientos sísmicos de los mercados internacionales contra la periferia de la eurozona pueden obligar al jefe del Ejecutivo y al líder del PP a clausurar sus ambivalentes estrategias. Si la embestida financiera continúa y no encuentra una respuesta concertada, Zapatero no sólo perdería las elecciones, sino que además retrospectivamente sus errores se verían agigantados, y sus méritos, negados, mientras Rajoy recibiría un poder tan devaluado como el que hoy ejerce Papan-dreu en Grecia. •

CAJERO AUTOMÁTICO por El Roto

Rumores



LA COLUMNA

Poda de funcionarios

Santos Juliá



CON LA DEUDA que no deja de crecer y con el paro en la cima, el Gobierno se ha creído obligado a demostrar su firme voluntad de atajar el gasto público y acometer un plan de poda de altos cargos y de reducción de número de funcionarios limitando al 10% la reposición de plazas vacantes. De lo primero, ya se ha visto el glorioso resultado: 16 millones de euros, a costa, entre otras cirugías, de dejar a la Biblioteca Nacional sin dirección general: parece una broma si no fuera una muestra de la estima en que el Gobierno tiene a la institución que debía ser, con el Museo del Prado, la niña de los ojos de su Ministerio de Cultura.

Y de la reducción de funcionarios, no vendrá mal recordar que la impresión de despilfarro e ineficiencia, no siempre justificadas, de la función pública en España nada tiene que ver con su número. De hecho, España está, en cantidad de empleados públicos muy por debajo de Francia, y no digamos ya de los países nórdicos. Sumamos entre funcionarios y contratados, si el *Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas* no miente, 2,66 millones, lo cual parece una enormidad —no ha faltado ilustre periodista que haya propuesto su drástica reducción hasta quedar en 700.000— pero no somos más que el 11,6% de la población activa y el 14,3% de la hoy ocupada.

Lo interesante es que, de ese total, medio millón trabaja en las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud y otros 650.000 en los diferentes niveles del sistema educativo, de infantil a universitario: nada menos que 43 funcionarios de cada 100 son empleados en sanidad y educación. Tal vez se podría reducir este número a su cuarta parte, como propone Luis María Ansón, pero entonces habría que explicar cómo se proporcionan a cada españolito que viene al mundo 14 años de escolarización obligatoria, o cómo se garantiza a todo el que lo demanda una atención médica y hospitalaria gratuita y de calidad como la dispensada por el Servicio Nacional de Salud.

Una vez descontados los empleados en instituciones docentes y sanitarias, resulta que, del resto, algo más de un cuarto de millón son militares, policías y guardias civiles, o sea, personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que es preciso añadir el personal adscrito a la administración de justicia y a los centros penitenciarios y las policías locales y autonómicas, lo cual eleva el total de los encargados de seguridad interior y exterior a otro medio millón. ¿Propondría alguien que también esos efectivos se podaran hasta reducir a 125.000 la suma de policías, guardias civiles, jueces y demás que velan por el orden y la seguridad?

Por supuesto, todos estos funcionarios, más los conductores de autobuses urbanos, los encargados de la limpieza de calles, plazas y paseos, los diligentes expendedores de documentos de identidad, pasaportes y carnés de conducir, los vigi-

lantes de museos, etc., etc., no se caracterizan precisamente por sus altos salarios ni por sus millonarios planes de pensiones: congelar el salario de un médico, un maestro, un policía, un administrativo, no tiene idénticos efectos que congelar el de un directivo del BBVA o del Santander. Vamos, que con congelar a unos cuantos de estos habría para mantener la temperatura de varias decenas de miles de aquellos: el salario anual de 1.000 funcionarios importa la mitad del plan de pensiones de algún alto ejecutivo bancario. En todo caso, no es por ahí por donde el Estado podrá ahorrar sin grave deterioro de los servicios que los ciudadanos reciben de las instituciones sostenidas en el trabajo de estos funcionarios.

¿Por dónde, pues? Por una mayor eficiencia, desde luego, pero también por donde sobran, por las burocracias clientelares que han crecido al rebufo de las autonomías sin más control que la amistad de presidentes, consejeros y demás cargos en función de neocaciques. Ahí, en séquito de autoridades autonómicas, en oficinas abiertas en el extranjero, en televisiones para amigos, en directores o directoras generales de identidad, en asesores internos y externos, en estudios sobre el color de los peces y otras corruptelas y corrupciones, es por donde habría que comenzar los planes de austeridad y de poda. Lo que pasa es que a base de reducir el Estado, las tijeras del Gobierno no alcanzan para iniciar esos trabajos de saneamiento y se mete en faena suprimiendo la dirección general de la Biblioteca Nacional. Lo dicho: la montaña parió otra vez —y van ya ni sabe cuántas— un ratón. •